II

La España real: hechos, análisis y documentos

Genaro Campos

Los dos primeros gobiernos de la Monarquía y sus relaciones con el poder económico

La concepción ampliamente difundida entre las filas de la oposición política de que el franquismo no era una dictadura de la gran burguesía sino de una reducida camarilla que permanecía aferrada a la persona del dictador como único medio de mantener sus privilegios, llevaba a pensar que una vez desaparecido éste se produciría un «vacío de poder» mientras los representantes del gran capital buscaban una nueva fórmula política más acorde con sus intereses. De ahí que la táctica pactista de la oposición política se oriente a instaurar un nuevo equilibrio en el que el actual sistema económico se mantenga de forma estable bajo unos presupuestos políticos que, se supone, beneficiarían tanto al capitalismo como a la oposición, siendo los únicos perjudicados los que se agrupan en la camarilla citada. Según esta concepción el amplio pacto democrático —en el que participarían activamente nutridas fuerzas del capitalismo más «consciente», «dinámico» y «europeo» junto con las otras fuerzas de la oposición política— barrería los restos de la «superestructura» franquista mediante la tantas veces mencionada «ruptura democrática». Pues esta «superestructura» politica se consideraba inadecuada a la base económica, dados los cambios operados en ésta.

Pero los hechos parecen ser otros. Los representantes del gran capital nacional y extranjero no han pasado a engrosar las filas de la oposicion sino que se han definido en favor de la continuidad en el cambio. Es decir, en favor de realizar desde el propio gobierno pausadamente los cambios formales necesarios para mantener la estabilidad del sistema. Hace falta tener mucha fe para sostener que los dos primeros gobiernos de la Monarquía no son representativos de los intereses del gran capital español y extranjero.

Afirmar que los hombres del Banesto, del Urquijo, de Altos Hornos, de Explosivos Río Tinto, de la United States Steel, de la Rank Xerox, de la Liga Financiera, de Esso, etc. no son representativos del sistema es intentar hacer «comulgar con ruedas de molino» a los creyentes.

En realidad, si los hechos no se acomodan a lo previsto por la concepción pactista que acabamos de enunciar es porque parte de unas premisas equivocadas. Pues ni el franquismo ha sido la dictadura de una camarilla ni el desarrollo económico ha modificado la situación dando un peso importante a un supuesto «neocapitalismo» partidario de la «democracia europea» y deseoso de romper con el regimen. Como se ha señalado en el número anterior de esta revista [1] los únicos cambios decisivos que se han producido en el poder económico durante el franquismo son la nueva irrupción del capital extranjero y la mayor importacia económica que adquiere el Opus Dei mediante el manejo en beneficio propio de los resortes del poder político, fenómenos ambos acaecidos en la decada del 60. Con todo, las grandes familias de la oligarquía continúan siendo el primer centro

1. Véase Genaro Campos Ríos: «Oligarquía y franquismo», **Cuadernos de Ruedo ibérico**, 49-50.

de poder económico que ejercen, bien a través de su presencia directa en los órganos directivos de la empresas, bien a través de un sistema financiero cada vez más diversificado. Así, los nuevos grandes capitalistas surgidos durante el franquismo, Banús, Barreiros, etc no dejan de ser una excepción y su importancia económica raras veces alcanza a la de las familias tradicionales de la oligarquía. La cuestión es que ni estos «neocapitalistas» excepcionales, ni el capital extranjero, ni el Opus Dei han dado muestras de una clara vocación democrática.

El fenómeno de entrada del capital extranjero ha sido con frecuencia mal interpretado por la oposición política. Normalmente se habla de la «penetración» del capital extranjero como si ésta ocurriera a pesar y en contra de los intereses del capitalismo español. Sin embargo, el fenómeno de la integración creciente de la economía española en el sistema capitalista mundial que se observa desde la firma de los acuerdos con los Estados Unidos a principios de la década del cincuenta, es un hecho deseado y conscientemente planeado por los representantes más «dinámicos» y «conscientes» del capitalismo español.

El «modelo autárquico» de los años cuarenta, a pesar de su coherencia desde el punto de vista económico, había mostrado claramente sus limitaciones y ofrecía escasas posibilidades al desarrollo capitalista cuando en el umbral de la década del cincuenta se había dado un paso decisivo en el autoabastecimiento alimenticio y energético del país y en la implantción y mejora de la red de comunicaciones y ciertas industrias de base. Así, los representantes del gran capital español tenían conciencia de que este «modelo» era «antieconómico y, por tanto, no aconsejable» (E. Botín, Junta general de accionistas del Banco de Santander, 1953) y que era conveniente un «sistema de mayor libertad» (T. Bordegardy, Junta general de accionistas del Banco de Vizcaya, 1957) en el que el papel del Estado en el campo económico fuera más limitado. Los hombres del Opus Dei comprendieron estos problemas y, de acuerdo con las exigencias de las posiciones dominantes de la burguesía financiera española, modelaron un «consciente y deliberado programa de apertura de la economía hacia el ancho campo de los espacios económicos» (Navarro Rubio). El éxito de las medidas de «liberalizacion económica» y de apertura de la economía española al capital extranjero que acompañaron al Plan de estabilizacion de 1959, fue el racionalizar los intereses de quienes realmente tenían el poder económico.

Como consecuencia de aquellos cambios, el capital extranjero vuelve a ser sujeto fundamental a la hora de explicar el desarrollo de capitalismo español. En efecto, como ya hemos señalado en otra ocasión [1], en 1959 existían consejeros extranjeros en sociedades anónimas españolas que representaban el 15,5 % del capital desembolsado total. Diez años más tarde, después de la «liberalización económica», este porcentaje ha aumentado hasta alcanzar a sociedades que suponen el 28,9 % del capital desembolsado por la totalidad. Aunque este dato es suficientemente revelador de la mayor importancia adquirida por el capital extranjero en la economía española, no denota la verdadera amplitud de este fenómeno. El hecho de que las inversiones extranjeras se concentren en sectores y empresas que tienen posiciones dominantes en el conjunto económico y de que se sirva con frecuencia de representantes de nacionalidad española, hace que el dato antes indicado no refleje la importancia económica que ac-

1. Véase G. Campos, artículo citado.

tualmente tiene el capital extranjero en la economía española, siendo éste más fuerte e influyente de lo que sugieren estas cifras. Por otra parte, la frecuente constitución de sociedades mixtas en las que el capital extranjero participa junto con los más importantes grupos de la oligarquía financiera española, hace que muchas veces sea difícil separar los intereses de unos y otros. Esta fusión de intereses será un hecho cada vez más frecuente, quedando relegadas las contradicciones a aquellos sectores que —como el de la banca— permanecen todavía al margen del capital extranjero y en los que éste puede aportar menores dosis de tecnología innovadora. Por tanto, las críticas a la «penetración» del capital extranjero que tantas veces ha ejercido la oposición política, no desde posiciones anticapitalistas, sino erigiéndose en defensora de los intereses del capitalismo «autóctono», además de haber tenido escaso eco —pues éste no necesitaba de los servicios de la oposición para hacer valer sus intereses frente al capital extranjero— tienen cada vez menos base real. Tales críticas cierran los ojos al hecho de que el capitalismo, en su etapa actual de desarrollo, no tiene bandera sino que se sirve de una u otra según le aconsejan sus intereses.

La tradicional participación que los representantes del poder económico han tenido en los distintos gobiernos de Franco se acentúa ahora en los gobiernos posfranquistas. Es decir, que los representantes del gran capital —español y extranjero— no se inhibieron de participar en un poder político que, según los augurios de la oposición, tenía los días contados dada la inminencia de la «ruptura» democrática. Al revés, los grupos que detentan el poder económico lejos de aceptar la hegemonía de la oposición política en la construcción de un nuevo orden político reforzaron su participación en el gobierno con el fin de acometer, bajo su propia dirección y control, las reformas que la muerte de Franco había planteado con urgencia para asegurar la estabilidad política del sistema.

La presencia masiva de inequívocos representantes del poder económico en los dos primeros gobiernos posfranquistas confirma el hecho, otras veces constatado, de que en momentos difíciles en los que la crisis política y/o económica plantea la necesidad de resolver ciertos problemas que trascienden de la gestión diaria del Estado, los capitalistas prefieren participar más directamente en el poder político. En estas condiciones se acentúa la habitual correspondencia entre los grupos que detentan el poder económico y las personas que ejercen el poder político y se ocupan de la gestión del Estado. En este caso la estricta correspondencia entre el poder económico y el poder político elimina las posibles dudas que pudieran plantearse sobre la correspondencia o no de este último a los intereses y aspiraciones de aquél, dudas que procederían de la interpretación del franquismo como la dictadura de una camarilla a la que antes se hizo referencia. Tal correspondencia viene a subrayar que el proyecto político con el que los dos primeros gobiernos de la Monarquía instaurada por Franco intentan preparar la salida del régimen una vez muerto el dictador, se adapta a los intereses y deseos del gran capital. Este proyecto político puede llevarse de forma más o menos inteligente y acertada, pero no cabe duda que goza del apoyo de los núcleos más representativos del gran capital —español y extranjero—. Estos se han colocado en favor de la «evolución» y en contra de la «ruptura» democrática. Admiten que para dar una salida viable al régimen franquista, para restaurar su legitimidad y ampliar la base social que lo respalda no cabe más que acometer un

proceso de paulatinas reformas tendentes a implantar una «democracia» lo más formal posible. Esta solución en la que converge el acuerdo de los núcleos que detentan el poder económico —aunque existan diferencias en lo referente a los plazos o a la intensidd de las reformas— se concretaría en un proceso de «apertura» gradual que culminaría en un simulacro de referéndum y, finalmente, en un simulacro de elecciones. En este proceso se pretende evitar que se ponga en discusión la legitimidad del poder político y de la Monarquía nombrada por Franco para sucederle, recortando para ello las libertades reales en la medida que las circunstancias lo exijan y reprimiendo con dureza a aquella parte de la «izquierda» que se comporte de forma «subversiva» [1].

En esta situación la oposición política, olvidando el carácter dominante de la base económica sobre la «superestructura» política en la que tanto había insistido, magnifica ahora la fuerza política de aquellos grupos que siguen defendiendo las más puras esencias del franquismo, a pesar de su escaso poder económico y de las escasas posibilidades que hoy ofrece su mensaje político. Pero es que el considerar a estos grupos como su más peligroso enemigo constituye un buen pretexto para apresurarse a pactar con los verdaderos representantes del gran capital, llamados a poner en práctica el proyecto «aperturista» antes indicado. Así la oposición política se desarma frente a quien en realidad constituye su principal enemigo: los representantes del gran capital que sostuvieron ayer al franquismo y que intentan ahora poner en práctica un proyecto que, con el soborno de conceder ciertas libertades formales, empuje a buena parte de la oposición política a asegurar la continuidad del sistema.

Aunque la importancia que el capital extranjero tiene actualmente en la economía española es un hecho ampliamente admitido desde un punto de vista estrictamente económico, rara vez se extraen de ello consecuencias políticas. Prácticamente todos los grupos de la oposición política, lo mismo que los historiadores «notables», o no consideran esto como un factor político, o aun en el caso de hacerlo, ello no se refleja en las conclusiones. Sin embargo, como pasamos a ver a continuación, difícilmente se podría explicar la composición del primer gobierno de la Monarquía sin tener en cuenta estos aspectos.

Como puede comprobarse empíricamente, numerosos ministros del primer gobierno de la Monarquía no sólo provenían del campo de la empresa privada —lo que no sería una novedad— sino que han participado y prestado sus servicios en empresas que cuentan con elevados porcentajes de capital extranjero. Bien conocido es el caso de Villar Mir, ministro de Hacienda y vicepresidente de Economía, que ha sido presidente de Altos Hornos de Vizcaya y de Altos Hornos del Mediterráneo, empresas ambas controladas por la United States Steel al haber aportado un 27 % de su capital, siendo con mucho el mayor accionista. Este control ha permitido al capital extranjero beneficiarse de amplias concesiones de crédito oficial barato para colocar en el país su propia tecnología dejando fuera del mercado a otras más competitivas. Asimismo, Villar Mir ha sido presidente de Hidro Nitro Española, empresa de más de 500 millones de pesetas de capital controlada (en un 40 % de su capital) por Pechiney. En el Consejo de administra-

1. En Euskadi, la represión y las torturas se han agudizado con relación a las habidas durante las últimas épocas del franquismo. La prohibición de hablar de las torturas en la prensa muestra con claridad el tipo de «apertura» que se persigue.

ción de esta sociedad, junto con los representantes del capital extranjero, figuran los militares de la ACNP Antonio Salvador García —Secretario general—, J. Peñaranda Algar (de los servicios de información del ejército). Figuran también el ex alcade de Madrid José María García-Lomas, y otros personajes del mundo de las finanzas, como el catalán Pau Roig. También es conocido el caso de Antonio Garrigues Diez-Cañabate, ministro de Justicia en este primer gobierno, como representante de los intereses del capital extranjero en el Estado español. Pues tanto él como sus hijos Antonio, Joaquin, José María y Juan, además de ejercer como abogados del capital extranjero, ocupan puestos en los Consejos de administración de numerosas empresas, la mayoría con amplia participación del capital extranjero. Sin pretender agotar la lista de empresas en las que está representada esta familia, cabe señalar entre otras, IBM, Altos Hornos de Vizcaya y del Mediterráneo, General Foods Spain, Sears Roebuck de España (con 1 258 millones de capital), Westinghouse (con 935 millones de capital), Colgate Palmolive, Avon Cosmetics, Selecciones del Reader's Digest, Hilton of Spain, Holding Hotelero Hispania, Euroamérica de Financiación e Inversiones. Aunque son hombres del capital extranjero, ello no quita para que estén también representados en empresas típicas del capitalismo autóctono como Mariquita Pérez o Tranvías de Granada. También ocupan o han ocupado varios puestos —entre ellos el de vicepresidente y consejero delegado— de la Liga Financiera (750 millones de capital) donde hay una selecta representación del «neocapitalismo» hispano, por supuesto acompañada de capitalistas extranjeros y de capitalistas tradicionales. En este consejo de administración figuran los Loring, Julio Calleja González Camino (presidente) —a los que luego nos referimos— y Raimon Carrasco y Azemar (de la Banca Catalana).

Menos conocidas son las buenas relaciones de Fraga y Areilza —ministros de la Gobernación y de Asuntos exteriores, respectivamente en este primer gobierno— con el capital extranjero y que se concretan a nivel empírico y empresarial en que el primero ha sido presidente de la sección española de la conocida multinacional Rank Xerox y que Enrique de Areilza Churruca —conde de Rodas e hijo del segundo— es consejero de la General Eléctrica Española.

Esta participación en el gobierno de hombres ligados al capital extranjero responde a la importancia económica adquirida por éste según se ha ido concretando la opción conscientemente planeada por la burguesía española de estrechar sus lazos con el capital extranjero. Respondiendo a los intereses que representan, estos hombres puente entre el gran capital español y extrajero afirman que la economía española «ha de seguir ligada a la evolución general de la economía en los países del mundo occidental y muy especialmente con la de aquellos países con los cuales tenemos más relación» (Villar Mir, 15 de junio de 1974) y que «el modelo económico del proceso alcanzado en los últimos años debe ser mantenido, corregido y mejorado con fuertes estímulos a la inversión nacional y extranjera» (José María de Areilza).

La preeminencia del capital extranjero en el primer gobierno de la Monarquía pareció entrar en crisis de forma imprevista. Sin embargo, es obvio que el segundo Gobierno tiene una significación mucho más coherente y profunda que los meros problemas derivados del proceso democratizador reformista o rupturista.

Los problemas crecientes del sistema capitalista español y el consecuente endeuda-

miento exterior han planteado una situación de clara ventaja para los representantes del capital extranjero dentro del bloque dominante. Siendo el nivel de dependencia exterior cada vez más acusado, los problemas coyunturales han impuesto peticiones de créditos exteriores para no agravar más la situación económica a corto plazo, en la que se está realizando la delicada operación del cambio político. En este contexto, el viaje a Estados Unidos del monarca y el posterior del ministro de Hacienda en los que se obtuvieron «grandes éxitos» y la promesa de créditos ilimitados, marca precisamente el comienzo del fin del primer gobierno de la Monarquía: los bancos extranjeros concedían créditos ilimitados con la condición de que se liberalizaran las trabas tradicionales para su entrada en el país. Esta exigencia, que suponía la irrupción en el coto cerrado reservado al capital financiero nacional, fue rechazada enérgicamente por éste. Pero la banca privada española, que ha colaborado en la entrada del capital extranjero en la industria del país, no la permite en su propio campo.
Así, de forma inesperada para los profanos, los cuantiosos créditos ofrecidos por los banqueros norteamericanos quedaron congelados teniendo que enviarse urgentemente a Arabia Saudita al subsecretario de Hacienda para contratar un crédito de quinientos millones de dólares. Y en Arabia Saudita se encontraba este personaje cuando la banca privada —BANESTO especialmente— hacía saltar al primer gobierno de la Monarquía, también conocido como «gobierno de los embajadores», sirviéndose de un grupo que ha cuidado promocionado y financiado sistemáticamente: La Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP).
De esta forma el nuevo gobierno es el resultado de luchas por la hegemonía dentro del bloque dominante más que de pretendidas tensiones políticas en relación con el proceso «democratizador».

El segundo gobierno: la ACNP

Si se compara el estado mayor de la ACNP con el gabinete actual, es bien evidente que la ACNP ha tomado una gran parte del poder. Su presidente, el coronel Abelardo Algora, decía hace dos años (*Tele-Expréss,* 11 de mayo de 1974): «la Asociación nunca toma opciones políticas; esto es una realidad. Porque es sabido que grupos políticos son aquellos que tienden a la conquista del poder. La Asociación lo que está haciendo es apostolado para la vida pública». Declaraciones de este tipo son frecuentes. Gabriel Peña Aranda, otro acenepista con cargos públicos, director de Radio y Televisión, decía en una entrevista publicada en 1970 (*El Correo de Andalucía,* 3 de junio): «El que hombres de la Asociación, por su vocación política, hayan llegado a ministros, no quiere decir que estos ministros hayan sido de la Asociación. Personalmente pertenecían a ella, lo cual no quiere decir que la Asociación tenga ministros. Es una cosa que me gustaría que quedara bien claro». Nunca había quedado tan claro como tras la formación del segundo gobierno de la monarquía.
Hacia 1970, el Consejo nacional de la ACNP era como sigue:

Abelardo Algora Marco	Presidente
Eduardo Carriles	Vicepresidente (ahora *ministro* de Hacienda)
Miguel Benzo Mestre	Consiliario nacional
Federico Silva Muñoz	Vicepresidente (ex ministro)
Francisco Guijarro	Consejero
Alberto Martín-Artajo	Consejero (ex ministro)
Manuel Amorós Gonzálbez	Consejero
Julio Sánchez Morales	Consejero
Landelino Lavilla	Consejero (ahora ministro de Justicia)
Marcelino Oreja Aguirre	Consejero (ahora ministro de Asuntos exteriores)
Alfonso Osorio García	Consejero (ahora ministro de la presidencia y vicepresidente del gobierno)
Alberto Colomina Boti	Tesorero general
José Giménez Mellado	Secretario general
Ignacio Gómez-Acebo	Vicesecretario
Carlos García de Ceca	Secretario general adjunto

La prensa que ha hablado de «personajes de segunda fila» y de «políticos desconocidos» no sabe lo que se dice, o intenta disimular lo que sabe acerca de la ACNP. Así, *El País* titulaba la información sobre el nuevo gobierno con una exacta descripción: «Los propagandistas al poder», pero olvidaba después explicar qué había sido y es la ACNP desde su fundación en 1909, qué es ese club de la gran burguesía cuyos presidentes han sido Angel Ayala, Herrera Oria, Martín-Sánchez Juliá, Abelardo Algora, qué ha sido y es esa élite de la burguesía [1]. La irrupción de la ACNP en el gobierno, lejos de indicar una crisis en el sistema de dominación capitalista, es la culminación de unos años de renovación y preparación para continuar ese dominio con métodos ligeramente cambiados. La ACNP de Herrera Oria, introductora y difusora del corporativismo en España, la ACNP de Larraz, Máximo Cuervo, Martín-Sanchez, constructora del Nuevo Estado franquista, administradora de la economía autárquica, encargada de las instituciones penales y represivas en los años 1940, la ACNP de Martín-Artajo y Castiella (y Ruiz Giménez) que rompió el bloqueo exterior al franquismo ayudando decisivamente a consolidarlo, la misma ACNP que hacia finales de la década de 1960 efectuó un repliegue para poder saltar mejor después a la captura de la cumbres políticas en el posfranquismo, ésa es la ACNP que ahora ocupa las carteras ministeriales más importantes. No *sirven* a la gran burguesía: *son* la gran burguesía, y al servirse a sí mismos, sirven a su clase, que con este gobierno ocupa, aun más claramente que con el primero de la Monarquía, los resortes decisivos del poder. A falangistas oportunistas como Martín Villa y Adolfo Suárez se les han reservado puestos ingratos: gobernación y presidencia; si el gobierno se desgasta con la represión, los grandes burgueses quieren mantener limpias las manos.

La ACNP cuenta en el actual gabinete

1. La prensa española ha silenciado durante los dos últimos años el profético libro de A. Sáez Alba: **La otra «cosa nostra». La Asociacion Catolica Nacional de Propagandistas, Reproduccion y métodos de la derecha permanente** Ruedo ibérico, 1974. La oposición política no ha sabido, o mejor dicho no ha querido, aprovecharlo.

con algunos otros ministros, además de los ya indicados. Entre ellos, Andrés Reguera Guajardo, ministro de Información, quien había sido secretario general de la Asociación.

Veamos ahora cuáles han sido las actividades empresariales de estos personajes que formaban en 1970 el Consejo nacional de la ACNP, tanto las de quienes han sido o son ministros como las de los demás. Después completaremos el panorama haciendo mención de las actividades empresariales de otros ministros del actual gabinete que no son, o no consta que sean, de la ACNP.

Algunos de estos personajes del estado mayor de la ACNP no aparecen en el Directorio de Consejeros y Directores (edición de 1973), tal vez por ocupar en el momento cargos oficiales incompatibles. Así, Francisco Guijarro ha sido Director general de impuestos indirectos; es del cuerpo de inspectores del Timbre. Ha sido presidente de Caritas, presidente de La Editorial Católica (órgano de la ACNP, editora de *Ya* y otras publicaciones), presidente de la Fundación FOESSA: ha estado pues dedicado a la administración del propio club, y a organizar la recogida de información sobre la sociedad española que el club necesita para poder dirigir, orientar, dominar la sociedad. Manuel Amorós, notario de Valencia y después de Madrid (desde 1942) no parece haber tenido actividad empresarial. Julio Sánchez Morales de Castilla ha sido delegado del gobierno en una confederación hidrográfica: los acenepistas siempre han estado abundantemente representados en organismos autónomos, como también en los grandes monopolios estatales, y en las Cajas de Ahorros. Giménez Mellado, como Guijarro, ha estado dedicado a tareas de información y difusión del pensamiento acenepista, habiendo sido director del CEU y presidente de la Junta nacional de las Semanas sociales de España. Todos ellos eran personas ya de edad, pertenecientes a las antiguas promociones de acenepistas. Carlos García de Ceca, capitán auditor del ejércicio, ha estado metido en la organización sindical, en la universidad, en el CEDI. Todos los demás miembros del Consejo nacional de la ACNP en 1970 han tenido una activa vida empresarial, haciendo su apostolado en los Consejos de administración de varias empresas en tanto esperaban poder dar testimonio de su fe cristiana en el propio Consejo de ministros.

Empecemos por el presidente de la ACNP, Abelardo Algora Marco. El libro de Sáez Alba resume así su biografía: «Coronel del Cuerpo Jurídico. Presidente nacional de la ACNP desde 1965. Presidente de la Fundación Universitaria de San Pablo. Abogado en ejercicio. En 1964, el cardenal Pla y Deniel le nombró presidente de la Cruzada de la decencia, dependiente de la Comisión episcopal de ortodoxia y moralidad. Profesor de la Escuela de estudios jurídicos del Ejército y adjunto de la cátedra de Derecho procesal de la Facultad de Derecho de Madrid. Colaborador del gabinete de estudios de la Secretaría general técnica de la Presidencia del gobierno (1961). Presidente de Gesbolsa (sociedad de cartera del Banco Mercantil e Industrial)». Como es sabido, hay una estrecha conexión entre el Banco Mercantil y el Banco Hispano, del grupo Urquijo, y no está de más señalar que la familia Urquijo ha estado íntimamente ligada a la ACNP ya desde la fundación de ésta; el padre de los Urquijo y Landecho era muy amigo de Angel Ayala, el autor de *Formación de selectos* y fundador de la ACNP. Entre las actividades económicas de Abelardo Algora, el más selecto entre los selectos, se cuentan también las siguientes: secretario del consejo de Esso

Petróleos Españoles, secretario del Consejo de Inversiones Esso, y vocal de Producciones Cinematográficas Españolas. En el Consejo de administración de Esso Petróleos Españoles (sociedad con capital de mil millones de pesetas, ligada al Banesto y a Standard Oil), acompañan a Abelardo Algora dos personajes importantes: Alfonso Osorio y Luis Gómez-Acebo y Duque de Estrada, duque consorte de Badajoz, cuñado de Juan Carlos de Borbón, hermano de Ignacio Gómez-Acebo y Duque de Estrada (vicesecretario del Consejo nacional de la ACNP en 1970), e hijo del marqués de la Deleitosa, presidente honorario del Banesto y ex mandamás de ese banco, el mayor del Estado español.

Continuemos con Eduardo Carriles Galarraga. «Consejero de La Editorial Católica. Presidente del consejo rector del Instituto de Estudios profesionales superiores del CEU. Abogado del Estado, ha sido asesor jurídico de la presidencia del gobierno. Desde febrero de 1974, presidente de la Comisión de Consumo del Ministerio de Planificación del desarrollo. Consejero de Renfe y director general de La Unión y el Fénix». Hay que puntualizar que La Unión y el Fénix es una muy importante empresa del ramo de seguros, dependiente del Banesto. Ha sido además presidente de la Cadena de Ondas Populares Españolas, la radio de la ACNP y de la jerarquía católica. Ha sido también vicepresidente de Inmobiliaria Universitaria, empresa de la ACNP dedicada a la construcción y explotación de edificios para la enseñanza, cuyo consejero delegado ha sido Fermín Zelada, personaje de quien nos ocuparemos más tarde pues sintetiza muchas de las virtudes acenepistas. Carriles ha sido asimismo secretario del Consejo de Aeronáutica Industrial, acompañado de los Loring, Mahou, y Julio Calleja González-Camino, personaje importante este último en las relaciones entre el capital autóctono y extranjero.

Federico Silva Muñoz aparece como presidente de Campsa, administrador del Banesto, vicepresidente de Butano y, por supuesto, miembro del Consejo de administración de La Editorial Católica. Alberto Martín-Artajo —ya demasiado anciano— ha simultaneado sus cargos oficiales con la presidencia de la Sociedad Española de Metales Preciosos, y con su participación en los Consejos de la Sociedad Minero-Metalúrgica Argenta (presidida por Eugenio Calderón), en la Empresa Nacional de Electricidad y en el Banco Exterior de España (cuyo secretario es Fermín Zelada).

Landelino Lavilla, aparte de la habitual vinculación a La Editorial Católica, ha sido vocal de Inmobiliaria Universitaria (con Carriles y Zelada), y ha estado ligado al Bandesco y después al Banesto, como director general adjunto. Ha sido consejero de Campsa. Ha sido además consejero de Acerinox. Ha sido secretario de Cartera de Títulos, S.A. En esta empresa, cuyo capital es de cerca de 800 millones de pesetas, le acompañaban Julián Tiemblo (conectado al Banco de Vitoria, presidido por José María de Oriol y Urquijo) y, como asesor financiero, Pablo de Garnica Mansi, ligado a Bandesco y Banesto, a La Unión y el Fénix, etc.

Ricardo de la Cierva, buen conocedor de la ACNP, pues no está muy alejado de este grupo, cree que la ACNP se ha equivocado al hacer un acto de presencia tan abrumadora en el gobierno, en vez de aguardar un poco más. En un artículo en *El País* (8 de julio), titulado «¡Qué error, qué inmenso error!», ese panegirista del general Franco citaba a su abuelo, Juan de la Cierva, quien explicaba así la formación de un gobierno en 1930: «Se propuso para la cartera de Hacienda al señor Garnica, liberal (del Banco Español de

Crédito) [...] No aceptó Garnica y entonces propusieron al señor Argüelles, también amigo del rey (y consejero del repetido Banco) [...]». Tras señalar las conexiones entre el gobierno actual y el Banesto, la Cierva indica que también en esta ocasión los actuales señores Garnica y Argüelles han sonado en la maniobra. Se refiere a Pablo de Garnica y a Jaime Argüelles Armada, presidente de La Unión y el Fénix, administrador del Banesto (y consejero de otras empresas, entre ellas la Compañía Ibérica Refinadora de Petróleos, de la que también era consejero Adolfo Suárez). Así, la Cierva le echa la culpa de la crisis al Banesto, cuando él sabe muy bien que la ACNP no es un grupo político al servicio exclusivo o preferente del Banesto, sino una selección de toda la gran burguesía española: financiera, industrial y agraria. La Cierva no menciona a la ACNP en su artículo. Lamenta, sin decirlo explicitamente, que la ACNP se haya precipitado al poder demasiado pronto, cuando aún no tenía bien lavada su cara de los restos de corporativismo y franquismo: «Me sigue asombrando la decisión de dos hombres (Oreja y Lavilla) que eran, hasta ayer, una baza segura de futuro».

Aunque éste no sea un gobierno del Banesto, sino de la ACNP, y aunque la ACNP no esté ligada únicamente al Banesto (también lo está al Banco Central y al grupo Urquijo y a muchos otros bancos y empresas), es cierto que este gobierno y la ACNP tienen vínculos estrechos con el Banesto. Los nombres de Gómez-Acebo, de Garnica, han aparecido ya. Al estudiar las actividades empresariales de Marcelino Oreja Aguirre, otro de los consejeros nacionales de la ACNP que ahora han llegado a ministros, esas conexiones se hacen patentes. Oreja es de excelente familia: sobrino de José María Aguirre Gonzalo (presidente de Banesto, del Banco Guipuzcoano, de Agromán, etc.) y yerno del ex ministro Arburúa. De Marcelino Oreja sería particularmente absurdo decir que «sirve» a la gran burguesía; no la «sirve», sino que él mismo es un miembro selecto de la misma. Ha sido miembro de los consejos de administración del Banco Guipuzcoano, de Agromán (en cuyo consejo abundan los Oreja y los Aguirre), de Unión Cerrajera de Mondragón (importante empresa siderúrgica), etc. Cuando la prensa interpretó la crisis de gobierno como si hubiese sido impulsada por el Banesto y solucionada a su favor, prestaba atención a esas conexiones que venimos señalando. Pero los miembros de la ACNP están presentes en muchos otros negocios. Ninguno de ellos es obrero manual, pero sus amplias actividades empresariales no se limitan a unos pocos bancos y empresas.

De quienes eran consejeros de la ACNP en 1970, el que mejor carrera ministerial viene haciendo es Alfonso Osorio. Es abogado del Estado y teniente coronel del Cuerpo juridico del Aire. Fue subsecretario de Comercio con García Moncó, y presidente de Renfe cuando Silva Muñoz fue ministro de Obras públicas. Consejero del Reino. Casado con una hija de Iturmendi, que fue durante mucho tiempo ministro de Justicia de Franco. Ha sido presidente de Kynos, y de Kynos Internacional (maquinaria de obras públicas) uno de los vocales de cuyo Consejo de administración es Juan Arespacochaga, alcalde de Madrid. Ha sido presidente de Inversiones Esso y vicepresidente y secretario general de Esso Petróleos Españoles, en cuyo Consejo de administracion ha estado acompañado, como quedó dicho, por Abelardo Algora, presidente de la ACNP, y por el cuñado de Juan Carlos de Borbón, Luis Gómez Acebo. Ha sido consejero de SEAT, una empresa en la que la ACNP ha estado siempre bien representada (incluyen-

do a su presidente Juan Sánchez-Cortés y Dávila).

Quien era tesorero de la ACNP en 1970, Alberto Colomina Boti, es presidente de Construcciones Colomina (capital de 225 millones de pesetas). Los restantes miembros del Consejo de administración son: Emilio Colomina, marqués de La Felguera, como vicepresidente; Emilio Colomina Boti, como consejero secretario; y como vocales Andrés Reguera Guajardo (el actual ministro de Información) y Gonzalo Alfonso Fernández de Córdoba y Larios, duque de Arión (compañero, en la mar y en tierra, de Su Majestad el Rey). ¿De qué se hablaría en los Consejos de administración de Construcciones Colomina?

Hagamos aquí un pequeño aparte para considerar algunos datos político-económicos referentes a otros tesoreros que la ACNP ha tenido. Uno fue Fermín Zelada y Andrés-Moreno, quien ha ejercido su apostolado en muy diversos ambientes. Es secretario general del Banco Exterior de España, cuyo presidente es Manuel Arburúa, ex ministro, suegro de los ministros Oreja y Lladó. Es vocal de La Editorial Católica, y vicepresidente de la Compañía Española de Seguros de Crédito y Caución (cuyo director general ha sido Fernando Benzo Mestre, hermano del consiliario de la ACNP). Es consejero de Fomento de Comercio Exterior, y de Tarragona-Export, y consejero-delegado de Inmobiliaria Universitaria (donde le acompañaba el ministro Carrilles). Además es consejero nacional del Movimiento y procurador por la organización sindical, y ha sido delegado nacional de provincias y gobernador civil. Esa faceta falangista no le impidió ser monárquico de Don Juan, de cuyo Consejo privado fue miembro. Además ha sido, como buen acenepista, del consejo rector del CEU y del patronato del Colegio Mayor San Pablo.

Otro tesorero que la ACNP tuvo no hace muchos años, fue Juan Villalonga Villalba, hermano de Ignacio Villalonga, el presidente del Banco Central. Así pues, la ACNP no sólo esta en el Banesto, y en el grupo Urquijo, está también representada en el Banco Central, y el Banco Central se siente a su vez bien representado en un gobierno acenepista. Veamos ahora cuáles han sido las actividades económicas de Ignacio Gómez-Acebo y Duque de Estrada, quien era vicesecretario de la ACNP en 1970. Su principal actividad, o la que más prosperidad le habrá dado, es ser hijo de su padre, el marqués de la Deleitosa, consuegro de Juan de Borbón y Battemberg, hombre fuerte del Banesto durante mucho tiempo. Ignacio Gómez-Acebo, uno de los acenepistas de mejor familia, figura en los Consejos de administración de las siguientes empresas (en las que hay varias multinacionales): presidente del Chrysler Airtemp Ibérica, presidente de Ingenieros Consultores, presidente de Hornos y Gasógenos, vicepresidente de Firestone Hispania, vocal de Industrias Plásticas, vocal de Becosa Empresa Constructora.

Acaba aquí, pues, la lista de los miembros del consejo nacional de la ACNP que, además de dedicarse a la política y a la administración pública, se han dedicado también a la actividad empresarial. Varios de ellos (Carriles, Lavilla, Oreja, Osorio) son ahora ministros, y habían participado, con mayor o menos intensidad, en consejos de administración de empresas españolas y multinacionales. A éstos hay que añadir Andrés Reguera Guajardo, ministro de Información, quien en 1970 no formaba parte del consejo nacional de la ACNP pero que ha sido su secretario general. Reguera ha sido (aparte sus puestos en La Editorial Católica), presidente de Productos Asfálticos, vocal de Construcciones Colomina (como ya

quedó indicado), vocal de Butano (colega de Silva Muñoz en ese Consejo de administración), vocal de Refinerías de Petróleos del Norte. Ha sido consejero de Renfe, y secretario general de Campsa. Abogado del Estado, es un acenepista típico. Por cierto que Miguel Cruz Hernández, director de Cultura popular desde hace tiempo, mantenido en tal puesto de censor por Reguera, es también de la ACNP, habiendo estado inscrito en el centro de Albacete.

La carrera de otros miembros del gobierno, como Leopoldo Calvo Sotelo o José Lladó Fernández-Urrutia, se parece bastante a la de esos ministros-empresarios acenepistas. Ambos son retoños distinguidos de la gran burguesía. El primero ha sido consejero de Banco Urquijo, de Ibervial y Ferrovial (constructoras), presidente de Sodiga (autopistas); ha sido consejero de La Seda de Barcelona, presidente y después consejero de Renfe, y consejero-delegado de Unión Explosivos Río Tinto. Hombre del grupo Urquijo, está casado con una hija de Ibáñez Martín, acenepista desde antes de la guerra civil, diputado de la CEDA y después ministro de Educación franquista en los años más negros. De Calvo Sotelo (persona liberal, para el apellido que lleva, lo que no quiere decir mucho), ministro de Comercio en el primer gobierno y de Obras públicas en el segundo gobierno (campo en el que tiene experiencia por su actividad económica privada), se ha dicho que pertenece o ha pertenecido a la ACNP. José Lladó Fernández-Urrutia, cuñado de Marcelino Oreja, tiene vinculaciones familiares estrechas con el Banco Urquijo (su padre ha sido presidente, su hermano director). Ha sido consejero del Banco Mercantil (cuya fusión con el Hispano ya hicimos notar), de la Empresa Nacional Calvo Sotelo, y ha dirigido empresas de consultoría.

Hay otros ministros en el actual gabinete cuyas características sociales son algo distintas. Por ejemplo, el ministro de Industria, Pérez de Bricio, ha sido consejero de Enasa, Seat, Astilleros Españoles, Ensidesa, y presidente de Unesid (Unión de empresas y entidades siderúrgicas). De él podría decirse que ha hecho carrera en la empresa pública y en la administración, siempre al servicio de la gran burguesía (especialmente del sector siderúrgico), pero que él mismo no es un político-gran burgués, como lo son muchos de sus colegas en el gabinete. Algo parecido podría decirse del ministro de Educación, Menéndez Menéndez, catedrático de Derecho mercantil y del despacho de Rodrigo Uría —algún diario ha dicho que está bastante vinculado a la ACNP, lo que no sería de extrañar en una persona que ocupa la cartera de Educación en un gobierno como éste. De todas formas es más un servidor de la gran burguesía que un miembro de ella. Estas consideraciones se aplican también a Adolfo Suárez, quien ofrece sus servicios más en el campo político que técnico. Suárez ha hecho una carrera típicamente franquista: de joven, de Acción Católica en su provincia (con lazos tempranos, pues, con la ACNP); después, o simultáneamente, hombre del Movimiento y de camisa azul; ligado a Juan Aparicio (falangista con inclinaciones acenepistas) y a Sánchez Bella (quien ha sido acenepista y opusdeísta) ha administrado la Radio y Televisión. Esos antecedentes le cualificaban perfectamente para hacer de hombre de paja de la ACNP en la hora actual.

Conviene insistir en que la composición del nuevo gobierno no obedece a una maniobra sibilina de tal o cual grupo bancario (Banesto, por ejemplo) o de tal o cual secta o grupo político (ACNP), maniobra dirigida contra las personalidades

«demócratas» que figuraban en el gobierno anterior.

Algunos artículos de la prensa han aludido a presiones bancarias. Ninguno ha aludido (que sepamos) a presiones acenepistas, porque se considera de mal gusto, en esta hora de reconciliación, tener que explicar claramente la verdadera y negra historia de la ACNP. En el momento en que se diga demasiado que éste es un gobierno acenepista habría que satisfacer la curiosidad de los lectores y dar los datos pertinentes sobre esa Asociación. Pero si la prensa atribuyera el cambio de gobierno a una maniobra de ese grupo político, estaría tan errada como al atribuirlo a maniobras bancarias. En realidad, al estar agrupada en la ACNP una élite de la gran burguesía (en España la gran burguesía es unánimemente católica, y el capital extranjero, que no tiene religión, se asocia con esta burguesía al llegar a España), es lógico que si esta gran burguesía pretende participar más directamente, en esta hora difícil, en la gestión del poder, aparezcan entre los nuevos ministros varios que son a la vez miembros importantes de esta organización, siendo también miembros de los Consejos de administración de bancos y empresas importantes.

Es erróneo por tanto interpretar el cambio de gobierno como la conspiración de une mafia. Los criterios de selección de la ACNP son claros. Martín-Sánchez Juliá los exponía así en 1950: «Y recibimos precisamente, queremos recibir, no al católico que pudiéramos llamar corriente [...] sino al que tiene capacidad de dirección; capacidad de dirección en potencia o en acto, o sea, los mejores estudiantes, que tienen capacidad de dirección en potencia, porque han de ser abogados, ingenieros, catedráticos, o aquellos hombres situados en puestos señeros de la sociedad, desde los cuales se puede hacer un apostolado con espíritu y eficacia y servir a la Iglesia como ella quiere ser servida, que es una de nuestras normas. Por consiguiente nos interesa el catedrático, el jefe de una empresa, el director de un periódico, el hombre que se dedica a la vida pública: hoy, subsecretario; mañana, ministro» [1].

La ACNP es un club selecto, de pocos miembros (menos de un millar), pero ampliamente representativo de esas categorías sociales: los jefes de empresas, y quienes les sirven en la universidad, en la prensa, en el gobierno, o mejor aún, los jefes de empresa que a la vez son Directores generales o subsecretarios o ministros. Ese grupo de selectos (selectos por su origen de clase, selectos por su mayor capacidad de dirección en potencia o en acto, selectos, en fin, porque ellos se seleccionan mutuamente en las oposiciones, en los nombramientos) tienen apetencia de poder que autojustifican con la buena conciencia que da el saberse «selecto» y el estar haciendo apostolado a la vez que se ocupa una cátedra, se dirige un diario, se administra una empresa o se sienta uno en el Consejo de ministros. El ansia de poder exige que la ACNP formule proyectos políticos, como lo ha hecho a lo largo de toda su historia, y cree subgrupos políticos, o partidos. La UDE, el grupo Tácito, son frutos de la ACNP, como en 1931 lo fue Acción Popular y después lo fue la CEDA. En épocas de dictadura, la ACNP actúa directamente cerca del poder; en épocas electoralistas o preelectoralistas sus proyectos políticos han de ser aireados ante un público más amplio. La vinculación muy estrecha entre la ACNP y la jerarquía católica le impide, en efecto, en una situación medianamente democrática, convertirse ella misma, abiertamente, con publicidad, en el nú-

1. Sáez Alba: **Op. cit.**, p. 124.

cleo de un partido político. La ACNP es un club, un grupo, creación de la gran burguesía católica (y toda la gran burguesía es católica), en el que hoy día mandan Osorio, Oreja, Lavilla. Tanto Oreja como Lavilla son hijos de acenepistas. Ha sido y es el organismo político más importante de la derecha en España, y volverá a ser «madre de partidos políticos», para usar una expresión acenepista. Ha sido y es una élite de la burguesía, un club político de burgueses selectos, menos numerosos, más sólidos, menos advenedizos, menos nuevos ricos que el Opus Dei (con sus Rumasas y Matesas). En la reserva tienen aún a Silva Muñoz, a Fernando Alvarez Miranda y otros miembros que, si este gobierno se desgasta, aparecerán en escena, algunos como liberales, otros como garantes de la continuidad, todos de acuerdo en la continuidad en el cambio, para preservar el sistema económico y de poder.

No es adecuado (como hizo *La Vanguardia*) atribuir el nuevo gobierno a una intriga de palacio. Son ganas de disimular. *La Vanguardia* cuenta con periodistas que han leído el libro de Sáez Alba, su propio director lo conoce: ¿por qué prefieren embrollar las pistas? La razón es bastante clara. Al decir que el gabinete está compuesto por los amigos de Jacobo Cano (acenepista que fue secretario de Juan Carlos de Borbón, y que murió de accidente), se evita el decir que Jacobo Cano tenía en común con los miembros del gabinete su calidad de acenepista (bien lógica en persona que ocupaba tan selecto puesto), y se evita decir que los acenepistas son amigos también del cuñado del rey y de otros amigos del rey, que el rey es miembro importante del «Consejo de administración» nombrado por la gran burguesía para dirigir el estado capitalista y que por tanto es colega de los acenepistas de pro. No hace falta recurrir a camarillas de palacio, ni menos a amistades con personas fallecidas, para explicar la composición del segundo gobierno de la monarquía juancarlista. La política económica que este gobierno querría hacer es la que corresponde a los intereses que representa. Dejando de lado las expresiones aristótelicas que Herrera Oria utilizaba en la época corporativista, habiendo aprendido ya hace tiempo los rudimentos de la teoría económica capitalista [1], su lenguaje no es menos moderno que el que podría usar el Opus Dei o el presidente de cualquier banco. Su doctrina principal, el respeto al «mercado libre y competitivo ».[2]

1. Véase a este respecto Juan Martínez Alier: Ideologías de la derecha desde 1939, **Cuadernos de Ruedo ibérico**, 43-45.
2. Declaración programática del 17 de julio.